



**DESDE LA ACADEMIA**

# Corruptos pero imprescindibles

Fátima Peña, Vicerrectoría de Proyección Social

El 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es evidente que en El Salvador ha habido graves retrocesos en esta materia durante los últimos cuatro años. Según el último informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país realizado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en 2022 se registraron 136 agresiones hacia periodistas. Pese a la situación adversa para el periodismo crítico, algunos de los trabajos publicados por este tipo de medios de comunicación han sido fundamentales para caracterizar la coyuntura nacional y al régimen político. Estas publicaciones han evidenciado que el Gobierno y sus aliados han participado de grandes casos de corrupción y de graves violaciones a los derechos humanos. Precisamente por ello estos medios se han vuelto tan incómodos para las autoridades.

Para ejemplificar el punto anterior no hace falta ir tan lejos en el tiempo. Hace un par de semanas, el periódico digital El Faro reveló que decenas de reos trabajaron en una propiedad privada en playa Las Hojas, ubicada en el departamento de La Paz. Según la publicación, “Documentos del Registro de la Propiedad y las coordenadas de ubicación consignan que el lote 367, en el que están trabajando los reos, es propiedad de Marta Mileydi Campos, una empresaria y abogada para la que ha trabajado por años la madre del director de Centros Penales. Según datos del Registro, Alma Yanira Meza ha sido administradora o miembro de junta directiva de siete sociedades en las que Campos ha sido accionista. Campos ha confiado en Alma Yanira Meza sus negocios de la industria de la construcción, de bienes y raíces y sociedades de préstamo hipotecario o prendario” (Arauz,



2023). En septiembre de 2021, El Faro también publicó que el director de Centros Penales, Osiris Luna, vendió 42,000 sacos de alimentos valorados en \$1,609,087.50 que estaban destinados a atender las necesidades de personas afectadas por la pandemia de covid-19 (Lemus y Martínez, 2021). Sobre Osiris Luna, el periodismo investigativo también reveló los viajes en jet privado y su importante participación en los pactos del Gobierno de El Salvador con la pandilla MS. Por todos estos casos, Luna fue incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, publicada por el Departamento de Estado de EEUU. Por si lo anterior no fuera suficiente, el medio de comunicación, Noticias Uno, reveló esta semana que el ciudadano colombiano, José Antonio Potes, fue detenido en El Salvador, en el marco del régimen de excepción, acusado del delito de agrupaciones ilícitas. Cuando su caso se hizo viral, Potes fue liberado y señaló que fue Osiris Luna, quien llegó a sacarlo del penal donde estuvo recluido. Posteriormente, según Potes, fue obligado a grabar un video donde afirmaba que su captura había sido un malentendido. Pese a esta cantidad de hechos de casos de corrupción que nos han mostrado los medios de comunicación, hasta este día, no se tiene conocimiento de que exista algún tipo de investigación para determinar la responsabilidad y el nivel de involucramiento de Luna en estas acciones. Aunque existan suficientes evidencias de hechos que pudieran constituir delitos penales, Luna parece ser un funcionario completamente intocable. Si bien es cierto que la evidencia mostrada por las investigaciones periodísticas es confiable, hay preguntas que no han podido ser respondidas y que bien merecerían una reflexión y un estudio más profundo. De hecho, podríamos mencionar algunas interrogantes: ¿Por qué es intocable Osiris Luna, a pesar del desgaste que sus

acciones pueden representar para el gobierno salvadoreño? ¿A qué sectores representa? ¿De qué otras irregularidades de altas figuras del Gobierno tiene conocimiento este funcionario? Sobre esta última interrogante, en buen salvadoreño se podría decir: ¿A quién o a quiénes les tiene “la cola pateada”? De momento, las señales parecen mostrar que Osiris Luna es una parte fundamental del Gobierno de Nayib Bukele. Es un funcionario imprescindible para su proyecto de gobierno. Sin embargo, los hechos en los que se ha visto involucrado Luna revelan un curioso modo de actuar de alguien que sabe que él y sus allegados pueden lucrarse de los recursos del Estado de manera totalmente impune porque también sabe que controla una área clave del Gobierno, porque se sabe parte, quizás, de una especie de mafia de la que recibe protección y recursos.



Foto: Dirección General de Centros Penales (DGCP)